[English below]

Carta Política de MIGREUROP (ES)

Aprobada en la Asamblea General del 15–16 de Noviembre de 2025 (Rabat)

La presente Carta Política define los posicionamientos políticos centrales de Migreurop, tal como se han construido y consolidado desde la creación de la red y a lo largo de sus primeros veinte años de existencia. Este documento tiene un carácter dinámico y podrá incorporar, si fuera necesario, futuros posicionamientos políticos de la red.

Nuestros fundamentos

La red Migreurop, nacida en el Foro Social Europeo de Florencia (Italia) en 2002 y constituida oficialmente como asociación en 2005, está compuesta por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por personas militantes e investigadoras procedentes de 18 países de Europa, África subsahariana, el Magreb y Oriente Próximo. La red afirma su voluntad de actuar colectivamente y coordinar sus esfuerzos para **defender los derechos de las personas exiliadas y promover la libertad de circulación y de instalación**. Estos objetivos implican:

- **El fin de los obstáculos a la movilidad**, de la militarización de las fronteras, de la detención administrativa formal e informal, de las distintas formas de expulsión, así como de la externalización del control fronterizo y del asilo.
- **El respeto del derecho a la movilidad y a la libre circulación**, considerando que el derecho a migrar forma parte de los derechos económicos, sociales y políticos. Rechazamos así el modelo utilitarista que subordina las migraciones a modos de producción capitalistas y poscoloniales, reduciendo a las personas a su mera fuerza de trabajo.

Lejos de centrarnos únicamente en las políticas institucionales y en sus efectos, otorgamos una importancia central a la **manera en que las propias personas directamente afectadas** contornean, afrontan y transgreden cotidianamente las políticas migratorias desiguales y **ejercen su derecho a la movilidad**.

Nuestro enfoque

La red pone en sinergia el trabajo de actores del Norte y del Sur con el fin de construir una visión y un análisis compartidos de estos procesos, en particular en lo que respecta a las dimensiones de externalización de las políticas de gestión de los movimientos migratorios, el encierro de las personas exiliadas y el refuerzo de la securitización de las fronteras.

Articulamos nuestro trabajo en torno a tres ejes:

• **Documentar**: Migreurop recopila y sistematiza información de terreno sobre las condiciones de vida de las personas en migración, su (no) acceso a derechos y las violencias sufridas a lo largo de los recorridos de exilio. La red también documenta la elaboración, la evolución y la aplicación de las políticas migratorias en Europa y más allá (en África y en Oriente Medio).

• **Descifrar**: Migreurop pone en relación esta información recopilada gracias al trabajo conjunto de sus miembros individuales y asociativos, investigadoras/es y militantes. Migreurop produce análisis compartidos y multidisciplinarios sobre las consecuencias de las políticas migratorias en la vida de las personas exiliadas y en las sociedades en las que vivimos, a escala regional y desde una perspectiva histórica. Posteriormente, la red da forma a estos análisis mediante la elaboración de diversas herramientas de desciframiento (boletines de análisis breves, textos de posicionamiento, atlas y cartografías críticas, informes de observación o de misión, así como pódcasts o vídeos).

• **Denunciar**: A partir de estos análisis documentados, Migreurop denuncia las políticas migratorias europeas (incluidas las que son externalizadas) hostiles a las personas exiliadas, nombrando claramente la realidad multiforme y mortífera de los obstáculos a la movilidad, como el cierre de fronteras, el encampamiento de las personas exiliadas, la guerra contra las personas migrantes o el apartheid de las movilidades. La red alimenta y apoya a las organizaciones de las sociedades civiles euroafricanas y las movilizaciones de las personas exiliadas, de sus miembros y de sus organizaciones aliadas, mediante el intercambio y la difusión de herramientas, actividades de fortalecimiento de capacidades de sus miembros y acciones de sensibilización dirigidas al público en general.

Nuestros posicionamientos fundamentales

- **Poner fin al encierro de las personas extranjeras, a la represión, al racismo y a las violencias de las políticas migratorias en el Norte y en el Sur :**

Por el cierre de los campos de personas extranjeras, en Europa y más allá (2010)

A partir de los años noventa, se inaugura una nueva etapa en las políticas migratorias en Europa: la imposibilidad creciente de acceder de forma legal y segura al espacio Schengen. La Unión Europea (UE) entra entonces en una nueva era de control de sus fronteras, marcada por la destrucción, para algunas personas, de los derechos a circular y de las posibilidades de instalación, con la instauración de la obligación de visados y de sanciones contra las compañías que transportan a personas desprovistas de los documentos de viaje exigidos.

El endurecimiento de las condiciones de acceso al territorio europeo se ha materializado en las fronteras y fuera de ellas mediante el encierro en lugares de privación administrativa de libertad —con condiciones cada vez más carcelarias— y otras lógicas de exclusión, selección y encampamiento. Los dispositivos tecnológicos y las prácticas de vigilancia y control migratorio en las fronteras exteriores han hecho emerger un verdadero mercado de la seguridad, al

tiempo que han puesto de relieve la paradoja de unas políticas humanitario-militares cada vez más mortíferas, así como la hipocresía de las llamadas políticas de «acogida».

Desde su puesta en funcionamiento en 2005, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha desempeñado un papel cada vez más importante en la aplicación de la política migratoria ultra-securitaria de la Unión Europea. Respaldada por las instituciones europeas, que desde hace veinte años no han dejado de reforzar sus competencias en materia de control y expulsiones, así como su presupuesto y su equipamiento militar, la agencia es sin embargo acusada de violaciones reiteradas de derechos y, en particular, de complicidad y/o complacencia en casos de devoluciones en las fronteras europeas.

Desde los años 2000, se han firmado acuerdos asimétricos con países terceros de «origen» y de «tránsito» para facilitar la expulsión de personas extranjeras ilegalizadas en Europa, a través de múltiples marcos de negociación y de manera cada vez más informal. La ayuda pública al desarrollo se desvía así de sus objetivos iniciales —como la lucha contra la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible— y se convierte en moneda de cambio del control migratorio deslocalizado en África y en otras regiones, mientras los llamados Estados terceros tratan de sacar provecho de las oportunidades que ofrecen estas negociaciones.

Durante los últimos veinte años, la externalización creciente de las fronteras europeas ha generalizado prácticas diversas: vigilancia marítima, campañas de información y disuasión de la inmigración, encierro, delegación de responsabilidades en materia de asilo, securitización de las prácticas humanitarias, formación de guardias fronterizos, alineamiento de las legislaciones de los países externos a la UE con las de los Estados miembros, etc. La externalización se ha visto facilitada por la emergencia de una gobernanza mundial de las migraciones bajo el impulso de organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que participan de manera cómplice en la instauración de un régimen fronterizo desigual vinculado al modelo de economía neoliberal y capitalista.

Como consecuencia de la externalización de las políticas migratorias europeas represivas, de la gobernanza migratoria mundial y de la ambivalencia de los Estados de salida, el racismo y la xenofobia dirigidos contra las personas migrantes racializadas «legitiman» a las autoridades de los países de tránsito y de llegada para llevar a cabo, con total impunidad, campañas de devoluciones y expulsiones masivas, empujando a estas personas cada vez más lejos y hacia rutas más peligrosas.

En Europa y en África, la asociación frecuente entre las personas migrantes y las redes transnacionales del crimen en los discursos políticos y mediáticos contribuye a crear una confusión entre inmigración y criminalidad. La criminalización de los «pasadores», así como de las prácticas de facilitación, asistencia o ayuda mutua en contextos migratorios, se intensifica. La adopción de leyes «contra el tráfico de migrantes» incrementa en realidad las situaciones de precariedad para las personas extranjeras, al exponerlas al encarcelamiento y a nuevas formas de abuso, al tiempo que contribuye a la proliferación de un negocio de las fronteras. En los últimos años, en el Magreb y en África Occidental, las violaciones de los derechos humanos y de la solidaridad se multiplican, con la detención de militantes de la

sociedad civil bajo cargos especialmente graves, exponiéndolos a penas de prisión e incluso a la pena de muerte.

Pero la violencia de las políticas migratorias no se limita a causar la muerte. Se prolonga después del fallecimiento, en la negación del valor de las vidas de las personas migrantes, en la relegación a los márgenes de sus cuerpos y de su memoria. Como víctimas directas del control fronterizo, estas personas fallecidas impulsan luchas memoriales colectivas ante la ausencia de investigaciones institucionales, para reconstruir las circunstancias de las muertes, localizar y repatriar los cuerpos, y apoyar a las familias de las personas fallecidas en sus luchas por la verdad y la dignidad.

- **Promover la libertad de circulación como alternativa a las políticas migratorias mortíferas**

Llamamiento solemne por la libertad de circulación (2013)

En el contexto europeo descrito anteriormente, la idea de libre circulación dentro del espacio Schengen es más una expresión fácil de usar que una realidad concreta: excluye a los ciudadanos más precarios y a las personas "inactivas", a ciertxs trabajadores, a las comunidades estigmatizadas, así como a los nacionales de Estados terceros y a sus familias, sujetos a controles fronterizos basados en el perfil racial.

Desde hace aproximadamente 15 años, el tema de la libertad de circulación e instalación de las personas extranjeras se ha convertido progresivamente en un asunto de análisis dentro de la red Migreurop, a raíz de los movimientos de las personas denominadas "sin papeles" y frente al callejón sin salida de las regularizaciones "caso por caso". Este tema también se ha impuesto frente a la normalización progresiva de la violencia en las fronteras, utilizada como estrategia de disuasión. Asimismo, se ha afirmado como reacción al carácter ilusorio del enfoque del "triple beneficio" en el núcleo del Pacto Mundial para la Migración (2018), según el cual las migraciones internacionales podrían beneficiar a todas las partes —países de origen, receptores y las propias personas migrantes. Sin embargo, el Pacto —instrumento no jurídicamente vinculante— presenta objetivos contradictorios al promover simultáneamente las migraciones laborales temporales, circulares y flexibles (a menudo favorecidas por los Estados receptores), mientras pretende garantizar la reunificación familiar, cuando la movilidad estacional tiende estratégicamente a excluir a las familias de sus derechos de instalación. En el lenguaje internacional, "facilitar" la movilidad también hace referencia a otra práctica contra la cual la red se opone firmemente: la expulsión de personas en situación administrativa irregular, que ocurre para muchxs trabajadores tras la expiración de su permiso de residencia temporal.

Desde la crisis de acogida de 2015 en la Unión Europea —que no fue otra cosa que una crisis de sus propias políticas de inmigración y asilo—, las medidas adoptadas responden a una estrategia de instrumentalización de la cuestión migratoria, desplegada por las autoridades europeas para promover el refuerzo de las capacidades de actuación de las agencias de la UE (Frontex, Europol, pero también la Agencia Europea de Asilo - EUAA, antigua EASO) y continuar vulnerando los derechos fundamentales de las personas, tanto en su territorio como en las regiones afectadas por su política de externalización de fronteras. Desde su

creación, la red ha definido la política que llevan a cabo las autoridades europeas y sus socios como una “guerra contra las personas migrantes”, debido a la hostilidad bélica y al registro macabro de muertes causadas por políticas migratorias liberticidas. Por ello, se hace evidente la necesidad de repensar los imaginarios colectivos.

Defender la libertad de circulación nos permite salir del engranaje del endurecimiento de la orientación represiva en la gestión de las cuestiones migratorias, observable en todos los países donde la red está activa. Esta lucha nos brinda la oportunidad de cambiar el debate, rechazando alinearnos con los términos impuestos por nuestros adversarios políticos. Rechazamos toda lógica de selección de personas que podríamos “acoger” y nos negamos a debatir criterios que condicionen esa selección.

En todo el mundo, algunas personas disfrutan del derecho a acoger, partir, llegar, instalarse o volver a salir, liberándose de dominaciones estatales, económicas, coloniales, raciales o sexuales. Ellos y ellas experimentan la libertad de circulación en acción.

Nuestro compromiso con la libertad de circulación e instalación para todas las personas se basa en una constatación fundamental: esta libertad tiene una doble naturaleza. Para algunas personas sigue siendo un ideal por alcanzar, pero para otras ya constituye una realidad concreta. Esta dualidad nos lleva a considerar esta libertad no como una utopía, sino como un medio y un objetivo alcanzable, porque ya existe parcialmente.

Sin embargo, esta libertad solo tiene sentido y es deseable si se basa en una estricta igualdad de trato entre personas extranjeras y nacionales. Implica, por tanto, una lucha colectiva decidida contra todas las formas de discriminación y racismo. La universalidad del derecho a la libre circulación e instalación no es negociable.

Carta Politica di MIGREUROP (IT)

Approvata durante l'Assemblea Generale del 15-16 novembre 2025 (Rabat)

Questa Carta Politica definisce le posizioni politiche centrali di Migreurop, così come si sono sviluppate e consolidate dalla creazione della rete e nel corso dei suoi primi venti anni di esistenza. Questo documento è concepito come dinamico e potrà essere modificato per incorporare eventuali future posizioni politiche della rete.

Le nostre basi

La rete Migreurop, nata al Forum Sociale Europeo di Firenze (Italia) nel 2002 e costituita ufficialmente come associazione nel 2005, è composta da organizzazioni per i diritti umani, attivisti e ricercatori provenienti da 18 paesi d'Europa, Africa subsahariana, Maghreb e Medio Oriente. La rete afferma la volontà di operare collettivamente e di coordinare i propri sforzi per **difendere i diritti delle persone in movimento e promuovere la libertà di circolazione e di insediamento**. Questi obiettivi implicano:

- **La fine di: ostacoli alla mobilità,** militarizzazione delle frontiere, detenzione amministrativa formale e informale, varie forme di espulsione e esternalizzazione del controllo delle frontiere e dell'asilo.
- **Il rispetto del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione**, considerando che il diritto a migrare è un diritto economico, sociale e politico. Pertanto, rifiutiamo il modello utilitaristico che soggetta le migrazioni ai modi di produzione capitalistici e post-coloniali riducendo le persone alla sola forza lavoro.

Lontano dal concentrarci esclusivamente sulle politiche istituzionali e i loro effetti, attribuiamo un'importanza centrale al **modo in cui le persone più direttamente interessate** aggirano, affrontano e trasgrediscono quotidianamente le politiche migratorie diseguali, **esercitando il loro diritto alla mobilità**.

Il nostro approccio

La rete mette in sinergia attori del Nord e del Sud per sviluppare una visione e un'analisi condivisa di questi processi, in particolare riguardo all'esternalizzazione delle politiche di gestione dei flussi migratori, alla detenzione delle persone in movimento e al rafforzamento della sicurezza delle frontiere.

Il nostro lavoro si articola attorno a tre assi:

- **Documentare**: Migreurop raccoglie e sistematizza informazioni sul campo riguardanti le condizioni di vita delle persone migranti, il loro (non) accesso ai diritti e le violenze subite lungo i percorsi dell'esilio. La rete documenta inoltre l'elaborazione, l'evoluzione e l'applicazione delle politiche migratorie in Europa e oltre (in Africa e Medio Oriente).
- **Interpretare**: Migreurop mette in relazione le informazioni raccolte attraverso il lavoro congiunto dei suoi membri individuali e associativi, ricercatori e attivisti. Migreurop produce analisi condivise e multidisciplinari delle conseguenze delle politiche migratorie sulla vita delle persone in movimento e sulle società in cui viviamo, su scala regionale e da una prospettiva storica. La rete organizza poi queste analisi attraverso strumenti di decodifica diversi (note di analisi brevi, documenti di posizione, atlanti e mappe critiche, rapporti di osservazione/missione, podcast e video).
- **Denunciare**: Sulla base di queste analisi documentate, Migreurop denuncia le politiche migratorie europee (incluse quelle esternalizzate) ostili alle persone in movimento, nominando chiaramente la realtà multiforme e mortale degli ostacoli alla mobilità, come la chiusura delle frontiere, l'accampamento delle persone, la guerra ai migranti e l'apartheid delle mobilità. La rete sostiene e accompagna le organizzazioni della società civile euro-africana e le mobilitazioni delle persone in movimento, dei suoi membri e partner: condivisione e diffusione di strumenti, attività di capacity building per i membri e sensibilizzazione del grande pubblico.

Le nostre posizioni fondamentali

- **Porre fine alla detenzione degli stranieri, alla repressione, al razzismo e alla violenza delle politiche migratorie nel Nord e nel Sud:**

Per la chiusura dei campi per stranieri in Europa e oltre (2010)

A partire dagli anni '90, in Europa si apre una nuova fase della politica migratoria: diventa sempre più difficile entrare legalmente e in sicurezza nell'area Schengen. L'Unione Europea entra così in una nuova era di controllo delle frontiere, segnata dalla distruzione di alcuni diritti alla libertà di circolazione e alle possibilità di insediamento, con l'introduzione dell'obbligo di visto e delle sanzioni contro le compagnie che trasportano persone prive dei documenti richiesti.

L'inasprimento delle condizioni di accesso al territorio europeo si è concretizzato alle frontiere e altrove tramite la detenzione in luoghi di privazione della libertà amministrativa — con condizioni sempre più carcerarie — e altre forme di esclusione, selezione e accampamento. I dispositivi tecnologici e le pratiche di sorveglianza e controllo migratorio alle frontiere esterne hanno dato origine a un vero e proprio mercato della sicurezza, evidenziando al contempo il paradosso di politiche umanitario-militari sempre più mortali e l'ipocrisia delle cosiddette politiche di "accoglienza".

Dal 2005, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex) ha avuto un ruolo crescente nell'attuazione della politica migratoria ultra-sicurezza dell'UE. Supportata dalle istituzioni europee, che negli ultimi vent'anni hanno rafforzato le sue competenze in materia di controllo ed espulsione, il suo budget e l'equipaggiamento militare, l'agenzia è comunque accusata di violazioni ripetute dei diritti, incluse complicità e/o connivenza nei respingimenti alle frontiere europee.

Dagli anni 2000 sono stati stipulati accordi asimmetrici con paesi terzi di "origine" e di "transito" per facilitare l'espulsione di cittadini stranieri irregolari in Europa, attraverso numerosi quadri negoziali sempre più informali. L'aiuto pubblico allo sviluppo viene così deviato dai suoi obiettivi principali, come la lotta alla povertà e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, diventando una merce di scambio per l'esternalizzazione del controllo migratorio in Africa e altre regioni, mentre i cosiddetti paesi terzi cercano di sfruttare le opportunità offerte da questi negoziati.

Negli ultimi vent'anni, l'aumento dell'esternalizzazione delle frontiere europee ha portato all'adozione diffusa di pratiche diverse: sorveglianza marittima, campagne informative e deterrenti contro l'immigrazione, detenzione, delega delle responsabilità in materia di asilo, securitizzazione delle pratiche umanitarie, formazione delle guardie di frontiera, allineamento delle legislazioni dei paesi non UE a quelle degli Stati membri, ecc. L'esternalizzazione è stata favorita dall'emergere di una governance globale delle migrazioni sotto l'impulso di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), il Centro Internazionale per lo Sviluppo delle Politiche Migratorie (ICMPD) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), complici nell'istituzione di un regime di frontiere diseguali legato al modello economico neoliberale e capitalista.

Come conseguenza dell'esternalizzazione delle politiche migratorie repressive europee, della governance migratoria globale e dell'ambivalenza dei paesi di partenza, il razzismo e la xenofobia verso i migranti "razzializzati" legittimano le autorità dei paesi di transito e destinazione a condurre campagne di respingimento ed espulsione di massa con totale impunità, spingendo le persone sempre più lontano e verso rotte più pericolose.

In Europa e in Africa, l'associazione frequente tra migranti e reti criminali transnazionali nei discorsi politici e nei media contribuisce a creare un collegamento tra immigrazione e criminalità. La criminalizzazione dei "trafficanti" e delle pratiche di facilitazione, assistenza o mutuo aiuto nei contesti migratori si intensifica. L'adozione di leggi "contro il traffico di migranti" aumenta in realtà la precarietà dei cittadini stranieri, esponendoli a detenzione e nuove forme di abuso, contribuendo allo stesso tempo alla fioritura di un vero e proprio business delle frontiere. Negli ultimi anni, nel Maghreb e in Africa occidentale, le violazioni dei diritti umani e della solidarietà si sono moltiplicate, con l'arresto di attivisti della società civile con accuse particolarmente gravi, esponendoli a pene detentive e persino alla pena di morte.

Ma la violenza delle politiche migratorie non si limita a causare la morte. Si prolunga dopo il decesso, nella negazione del valore delle vite dei migranti, nella relegazione dei loro corpi e ricordi ai margini. Come vittime dirette del controllo delle frontiere, queste morti stimolano lotte memoriali collettive in assenza di indagini istituzionali, per ricostruire le circostanze dei decessi, recuperare e rimpatriare i corpi e sostenere le famiglie dei deceduti nelle loro battaglie per verità e dignità.

- **Promuovere la libertà di circolazione come alternativa alle politiche migratorie mortali**

Appello solenne per la libertà di circolazione (2013)

Nel contesto europeo sopra descritto, l'idea di libera circolazione nello spazio Schengen è più retorica che realtà concreta: esclude i cittadini più vulnerabili e le persone "inattive", alcuni lavoratori, le comunità stigmatizzate, così come i cittadini di paesi terzi e le loro famiglie, soggetti a controlli alle frontiere basati sul profiling razziale.

Negli ultimi 15 anni circa, il tema della libertà di circolazione e insediamento degli stranieri è diventato progressivamente oggetto di analisi da parte della rete Migreurop, a seguito dei movimenti dei cosiddetti "senza documenti" e in risposta all'impasse delle regolarizzazioni "caso per caso". Questo tema ha assunto maggiore rilevanza di fronte alla normalizzazione progressiva della violenza alle frontiere, usata come strategia di deterrenza. È emerso inoltre come reazione alla natura illusoria dell'approccio "triple win" al centro del Patto Globale per le Migrazioni (2018), secondo cui la migrazione internazionale potrebbe beneficiare tutte le parti — paesi di origine, paesi di destinazione e migranti stessi. Tuttavia, il Patto — strumento non vincolante legalmente — stabilisce obiettivi contraddittori, promuovendo allo stesso tempo migrazioni lavorative temporanee, circolari e flessibili (spesso privilegiate dagli Stati destinatari), pur cercando di garantire la riunificazione familiare, quando la mobilità stagionale tende strategicamente a escludere le famiglie dai diritti di insediamento. Nel gergo internazionale, "facilitare" la mobilità si riferisce anche a un'altra pratica cui la rete si oppone fermamente: l'espulsione delle persone in situazione amministrativa irregolare, che avviene per molti lavoratori dopo la scadenza del permesso di soggiorno temporaneo.

Dalla crisi dell'accoglienza del 2015 nell'Unione Europea, che non fu altro che una crisi delle sue stesse politiche migratorie e di asilo, le misure adottate fanno parte di una strategia di strumentalizzazione della questione migratoria, attuata dalle autorità europee per rafforzare le capacità operative delle agenzie UE (Frontex, Europol, ma anche l'Agenzia Europea per l'Asilo — EUAA, ex EASO) e continuare a violare i diritti fondamentali delle persone, sia sul territorio sia nelle regioni interessate dalla politica di esternalizzazione delle frontiere. Fin dalla sua creazione, la rete ha definito la politica perseguita dalle autorità europee e dai loro partner come una "guerra ai migranti", considerando l'ostilità bellicosa e il macabro conteggio delle morti causate da politiche migratorie liberticide. È quindi evidente la necessità di ripensare gli immaginari collettivi.

Difendere la libertà di circolazione ci permette di uscire dal ciclo dell'inasprimento delle politiche migratorie repressive, osservabile in tutti i paesi in cui la rete è attiva. Questa lotta ci offre l'opportunità di spostare il dibattito, rifiutando di allinearci ai termini imposti dai nostri avversari politici. Rifiutiamo ogni logica di selezione delle persone che potremmo "accogliere" e ci rifiutiamo di discutere i criteri che determinerebbero questa selezione.

In tutto il mondo, alcune persone godono del diritto di accogliere, partire, arrivare, insediarsi o ripartire, liberandosi dalle dominazioni statali, economiche, coloniali, razziali o sessuali. Esse sperimentano la libertà di circolazione in atto.

Il nostro impegno a favore della libertà di circolazione e insediamento per tutti si basa su una constatazione fondamentale: questa libertà ha una doppia natura. Rimane un ideale da raggiungere per alcune persone, ma è già una realtà concreta per altre. Questa dualità ci porta

a considerare questa libertà non come un'utopia, ma come un mezzo e un obiettivo realizzabile, perché già parzialmente esistente.

Tuttavia, questa libertà ha senso e può essere perseguita solo se si basa su una rigorosa parità di trattamento tra cittadini stranieri e cittadini. Implica quindi una lotta collettiva determinata contro tutte le forme di discriminazione e razzismo. L'universalità del diritto alla libertà di circolazione e insediamento è non negoziabile.